

## Armas, votos y tierras, el problema del conflicto armado en Colombia.

De Luis Fernando Bermeo Álvarez.

Sí alguien quiere aventurarse a comprender el conflicto armado en Colombia, se encuentra con una pregunta, ¿desde cuándo se puede decir que existe conflicto armado en el país? Esta duda sigue rondando los debates académicos que tratan de determinar una fecha o periodo estimado en el que establecer el inicio del conflicto. Para poner un ejemplo, existen dudas sobre si este se originó entre los años 40 a 60 del siglo XX, con fechas determinantes como el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, o el bombardeo a Marquetalia el 14 de junio de 1964.

La primera fecha marca el inicio y a su vez la terminación de un período, en la que la violencia partidista en la primera mitad del siglo XX tomó gran fuerza y desarrolló una espiral de violencia que casi pone al país al borde de una guerra civil. Sin embargo, también se puede marcar esta fecha como la transformación del conflicto partidista y una especie de pacto que posteriormente se suscribiría entre Liberales y Conservadores en el denominado “Frente Nacional”, que selló el proceso democrático colombiano en estos dos partidos, luego de un golpe de Estado. A su vez, la segunda fecha denota la aparición de las guerrillas no liberales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que posteriormente le agregarían a su nombre “*Ejército del Pueblo*” (EP) a su nombre, para mostrar el espíritu político de esta guerrilla (FARC-EP). Sin embargo, nada de esto hubiese sido posible sin el desarrollo y acumulación de una violencia que llevaba décadas ya, mucho antes del “*Bogotazo*” o de “*Marquetalia*”, y que desencadenaría lo que algunos académicos han denominado una “guerra sin nombre” (IEPRI, 2006) en Colombia. Por otro lado, hay quienes consideran “*la matanza de las bananeras*” en 1929 como el origen del conflicto armado, porque a partir de allí se estableció una “hegemonía liberal” que sería combatida por los conservadores a través de la lucha armada y política. Así como hay quienes ven en “*la guerra de los mil días*”, entre el final del siglo XIX e inicio del XX, el punto de inflexión en la configuración del histórico conflicto armado colombiano, por presentar claramente esta “guerra” la lucha armada por el poder entre el bipartidismo.

Sin embargo, estas aproximaciones carecen de un panorama amplio que permita contextualizar cada uno de estos episodios en unas constantes que han mantenido el conflicto armado desde la configuración del país como Estado independiente. Con esta perspectiva, se comprendería un poco mejor las dificultades históricas que arrastra este conflicto, y por qué, a pesar de que se haya firmado un “*acuerdo para la terminación del*

*conflicto*” con las FARC-EP, el conflicto permanezca y sea quizás aún más fuerte en algunas zonas del país, sin que existan grandes perspectivas de mejoramiento.

Una primera constante es **la lucha por el poder político a través de las armas**, es decir, la violencia estructural, porque desde la misma configuración del Estado colombiano en 1821, con la expedición de la que puede considerarse la primera Constitución del país (con la que se coronó la guerra por la independencia), la lucha por el poder político a través de las armas marcó la pauta que seguiría esta sociedad por más de doscientos años. Esta lucha es sangrienta, e implicó que los máximos líderes de la independencia hayan sido al mismo tiempo los generales que lucharon contra el colonialismo español. En este contexto, durante el siglo XIX, prácticamente el mayor honor social era ser militar o tener a alguien en la familia dentro del ejército, porque esto representaba casi que la única actividad que permitía movilidad social. En ese momento, la casta militar se confundió con los terratenientes, lo que demuestra muy bien el icono de Bolívar, un terrateniente que terminó convirtiéndose (a parte de ser el libertador) en el primer presidente de la República, (aunque antes de morir haya tenido que sufrir un atentado con motivaciones políticas, en el que por poco muere, terminando sus días en soledad y en bancarrota<sup>1</sup>).

A su vez, por vía constitucional, era permitido en algunos periodos del siglo XIX que los particulares tuvieran armas, cuando el Estado era todavía muy débil y era muy difícil la comunicación y el transporte dentro del territorio. La debilidad del Estado en esta época puede reflejarse en dos aspectos: i) las luchas internas por el poder entre las facciones políticas afines a las figuras de Santander o Bolívar y ii) el poco desarrollo de la industria mientras en Europa y Estados Unidos estaba en plena ebullición la revolución industrial. Esto muestra porque las principales actividades económicas del país han estado en el campo. Las élites del siglo XIX en Colombia tenían grandes concentraciones de tierras, que dedicaban a la agricultura y la ganadería, sin un Estado fuerte que las defendiera, por lo que se armaban y a la vez participan en política, lo que dio lugar a la conformación de los partidos políticos a mediados del siglo (XIX) (Bushnell, 2017), concentrando en cada una de sus cúpulas a grandes terratenientes, lo que implica la unión de tres factores reales de poder, económico, político y militar en un mismo grupo de personas, que protagonizaron conflictos armados internos durante todo ese siglo, coronado con “la guerra de los mil días”. En dicho siglo se conformaron estos partidos, marcados quizás por una única diferencia, tal como lo propone David Bushnell (2017), su opinión respecto de la religión del Estado, si debía o no existir una, en otras palabras, sobre la laicidad o no del Estado. En este contexto incluso dentro del partido liberal (que abogaba por la laicidad) se crearon facciones en torno a este problema (gólgotas y draconianos), por lo que no existía una “disciplina” o identidad de partido consolidada. Por lo tanto, académicos como David Mercado (2008) han dicho que **en Colombia no hubo partidos en el siglo XIX y XX, sino uno solo, la élite criolla.**

Con este panorama inició el siglo XX para Colombia, y terminó con un conflicto armado llegando a su cúspide, alternándose la lucha armada por el poder político con elecciones,

---

<sup>1</sup> Hay una novela de García Márquez que representa esta situación de Bolívar, “*El General en su laberinto*”.

que decidían los nombres y partidos de que quienes gobernaría durante un tiempo al país, pero que difícilmente cambiarían las características estructurales de la sociedad, como la reafirmación de una economía poco industrializada, basada en la tenencia de grandes extensiones de tierra, lo que convirtió al país por un tiempo en el primer exportador de café del mundo. Por otro lado, la violencia estructural se recrudeció durante este siglo, siendo incluso tolerable el uso común de armas por parte de civiles, que fungían como miembros de organizaciones políticas, como los conocidos “pájaros”, banda criminal del partido conservador a mediados de siglo<sup>2</sup>.

En este contexto se produce el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, quien además había estudiado en Italia (y fue influenciado por Enrico Ferri, profesor por ese entonces de Derecho penal). Este político liberal había sido cercano al socialismo y el mismo día de su muerte, cuando acababa de terminar una famosa defensa de un militar en un caso, se llevaba a cabo la reunión de la Conferencia Panamericana en Bogotá, asociación que posteriormente daría lugar a la Organización de Estados Americanos, y en la que la mayoría de países, bajo la influencia de Estados Unidos, querían cerrarle el paso al comunismo. Ese mismo día Gaitán tenía una cita con Fidel Castro, por lo que otro aspecto poco mencionado en los análisis de su asesinato es la relación de las fuerzas internacionales del liberalismo, como Estados Unidos, que querían aislar la influencia del comunismo en Latinoamérica. Después de esta muerte se abalanzó sobre la sociedad colombiana una espiral de violencia que dio lugar a un golpe de Estado, que posteriormente sería reemplazado por un acuerdo entre los partidos políticos (Liberal y Conservador) para alternarse el gobierno del país, en periodos iguales, lo que cerró las puertas a otras alternativas políticas, como las ideas socialistas y comunistas, lo que al final terminaría significando la conformación de guerrillas, liberales (M-19, entre otras) y no liberales (FARC, y algunas otras), que disputarían el poder político desde las armas y la ilegalidad.

A este coctel hay que sumarle el narcotráfico, que justo en la segunda mitad del siglo XX aparece con toda su fuerza en el país, añadiendo un ingrediente más a este “sancocho”<sup>3</sup> social explosivo. Esta nueva actividad económica ilegal se forma desde el campo, y llega a las ciudades con el microtráfico. Así mismo se crearon los controles ilegales por parte de grupos armados que controlaron esta actividad, los famosos carteles, entre los que se formaron el de Medellín y Cali, el uno liderado por Pablo Escobar y el otro por los hermanos Rodríguez Orejuela. En principio estos grupos no tenían una clara aspiración política, pero poco a poco el prohibicionismo internacional, en especial, el rol de Estados Unidos, hizo que impusieran su poder económico en la política nacional y trataran de convencer a las élites del país de permitirles disfrutar su dinero sin más persecuciones. De hecho, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en Colombia por el partido Liberal. Sin embargo, la eficacia de su decisión duró poco, y pronto se desataría una guerra entre las fuerzas del Estado, junto a otras bandas criminales<sup>4</sup> contra el narcotráfico, que terminaría

---

<sup>2</sup> Existe una novela de Gustavo Álvarez Gardeazabal, “Cóncores no entierran todos los días”, llevada al cine por Francisco Norden, una de las novelas y películas más importantes de la literatura y el cine colombiano.

<sup>3</sup> Plato típico colombiano, un tipo de sopa que se comparte por lo general en familia.

<sup>4</sup> Los denominados PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar).

con la vida del “capo”, pero no con el negocio de la droga, y mucho menos con su relación con el poder político en Colombia. En este contexto, el campo, las ciudades, las guerrillas, los partidos políticos, la ciudadanía y el Estado tuvieron una relación con el Narcotráfico en Colombia, bien sea como víctimas (el caso de muchas familias que vieron morir a sus miembros en medio de los atentados tanto en ciudades como en zonas rurales) o como actores principales del negocio, como el caso de los carteles, las guerrillas y demás grupos armados que se involucraron en esta actividad.

Por ejemplo, **muchos terratenientes decidieron armarse en aquella época y “defender” su territorio ante la incapacidad del Estado, frente a las guerrillas que buscaban controlar más zonas del país.** En este sentido, algunos dueños de fincas, que además se dedicaban a las actividades económicas del sector primario, el más importante para la época en Colombia, Agricultura y Ganadería, conformaron asociaciones para “protegerse” de la guerrilla, lo que los llevó a su vez a controlar zonas territoriales donde se producía droga, lo que enmascara la “lucha contrainsurgente” en Colombia con el ánimo de lucro producto del narcotráfico de parte de estos grupos, que posteriormente se conocerían como paramilitares (Ramírez, 2015). A su vez, so pretexto de “unir esfuerzos” contra las guerrillas, las fuerzas del Estado actuaron en complicidad con estos nuevos actores armados ilegales para perpetrar masacres, torturas y demás graves violaciones de DDHH a miembros de la población civil, entre los que se cuentan estudiantes, defensores de derechos humanos, políticos, activistas, etc. **Así como a controlar el poder político en las zonas rurales donde tenían influencia.**

La escalada de violencia llegó a un momento inusitado en la historia colombiana, cuando en 1985 se dio la toma y retoma del Palacio de Justicia, en la que el ejército disparó con tanques el edificio de la Corte Suprema de Justicia, porque habían sido secuestrados ahí miembros de esa institución por parte de guerrilleros del M19. Lo que poco se dice en las páginas de historia colombiana es que ese mismo día de la toma, se iba a discutir en la Corte la extradición de narcotraficantes (Lemaitre, 2009), por el que este episodio es muy representativo de esta relación entre drogas, conflicto armado y política en Colombia. El cóctel había explotado y no parecía haber solución, los miembros de partidos políticos que se habían desmovilizado o que proclamaban consignas de paz o incluso alternativas diferentes a los intereses de las élites tradicionales o del narcotráfico, eran asesinados. Así ocurrió con miembros del recién creado partido Unión Patriótica<sup>5</sup>, o del mismo partido liberal. En ese contexto, se estableció un movimiento ciudadano alrededor de una nueva constitución, que finalmente permitió dejar a tras una que llevaba más de 100 años, y que fue utilizada para mantener el poder por parte de las élites.

Así, en 1991, justo meses después de la caída del muro de Berlín (noviembre de 1989), se dio una nueva constituyente en el país, que permitiría abrir un poco los espacios de la democracia en Colombia, manchada con sangre de los ex combatientes guerrilleros

---

<sup>5</sup> Por el cual existe una condena contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También existe otra condena por las desapariciones forzadas a manos de la fuerza pública de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia en la toma del M-19.

liberales, ciudadanos del común y miembros del ejército. Sin embargo, lo curioso de esta constituyente es que no abrió espacios de deliberación para las guerrillas no liberales, y, de hecho, el gobierno bombardeó el campamento principal de las FARC en las mismas fechas en las que se gestaba la constituyente, por lo que era clara la intención del Estado de seguir luchando contra quienes no abrazaran la ideología liberal. La nueva constitución, que actualmente rige al país, es en gran medida un reflejo de estos años de confusión y revuelo, porque contiene un catálogo de derechos propios de una socialdemocracia, aunque establece un sistema económico neoliberal, con algunas herramientas (muy poco usadas) de intervencionismo. De este modo, la materialización de los derechos en Colombia ha estado supeditada al modelo económico neoliberal, por lo que, aunque en la Constitución se haya realizado una “*revolución de los derechos*” (Jaramillo, 2016), en la realidad poco o nada se materializa.

Esto por cuanto la gestión de la economía no permite avances significativos en materia social, en tanto que ni siquiera hoy, en pleno siglo XXI, la industrialización ha alcanzado en gran medida a Colombia. Por lo tanto, **¿cómo hablar de democracia moderna en un país no industrializado? ¿Cómo puede votar informado un ciudadano que carece de acceso a recursos básicos por estar aislado en el campo, dónde convive con la violencia y la economía ilegal? Así mismo, ¿cómo puede desarrollarse una economía que se basa en el petróleo, sin ser potencia, y descuida la industrialización de los demás sectores? Básicamente, ¿cómo puede haber democracia moderna en un país que concentra su riqueza, aún, en la acumulación de grandes extensiones de tierras improductivas?** Dónde además sus élites luchan para que el status quo permanezca. Así es imposible que se desarrolle una democracia en buen estado de salud. En este sentido, los grupos armados al margen de la ley han aprovechado esta debilidad y complicidad del Estado para mantener un conflicto armado que ha dejado más de 8 millones de víctimas civiles, con la tasa de desplazamiento forzado interno más alta del continente y quizás del mundo.

Por otra parte, el acuerdo de Paz con las FARC solo fue posible gracias a la voluntad política de una élite que había entendido que los cambios que requería el país para funcionar en el marco de la globalización, no se lograrían con un conflicto armado tan incrustado en la sociedad, por lo que resultaba necesario negociar para acordar como gestionar un país de cara a la apertura económica global y con esto, además, derrotar definitivamente a la guerrilla más antigua del país. Incluso, se puede decir que con este acuerdo se cerraron las puertas al comunismo en Colombia. Sin embargo, el grupo político del ex presidente Santos no supo asegurar el poder, y con ello, las viejas élites que han mantenido el control político de buena parte de la población durante años, a base de estrategias de engaños en torno de la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como de evitar al comunismo, y también de aparentemente compra de votos, lograron hacerse nuevamente al poder y redefinir los nuevos esquemas de acción política en el posconflicto, dentro de los cuales está la lucha por esclarecer la Justicia y la Verdad del Conflicto, con instituciones que se crearon para tal fin como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, y la Jurisdicción Especial para la Paz, que el partido de gobierno quiere desmontar o acomodar, así como la conducción de la economía,

de modo que siga manteniéndose el poder en cabeza de los grupos económicos que los han apoyado, como banqueros, latifundistas y tal vez narcotraficantes.

Ahora quizás sea posible comprender porque las Naciones Unidas en febrero de este año informaron de un mal trabajo por parte del gobierno colombiano en la gestión del posconflicto, así como porque existen fotos de presidentes y ex presidentes del país con narcotraficantes, y también pruebas de ingreso de dinero producto del narcotráfico a campañas políticas, destinados entre otras cosas para comprar votos, especialmente en la ruralidad. Por lo que no es extraña esta relación entre poder político, élites económicas, narcotráfico y ruralidad. En Colombia todavía perdura la relación entre armas, votos y tierras.